



Informe 0603/2008

La consulta plantea si resulta conforme a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 11/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal, la comunicación de datos personales de empleados, colaboradores (nombre, apellidos y titulaciones académicas), es decir, datos curriculares, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el ámbito de los concursos y licitaciones con las Administraciones Públicas.

I

Como punto de partida es preciso señalar que la transmisión planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”

Tal y como indica el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no sería preciso contar con el consentimiento del afectado en caso de que la cesión prevista pudiera ampararse en el artículo 11.2 c) de la Ley.

Según el mencionado precepto, no será preciso el consentimiento del afectado “Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique”.

La consulta se refiere a la comunicación de datos de trabajadores de la consultante, lo que supondrá la preexistencia de una relación jurídica que vincula a aquéllos con ésta. También se refiere a datos de sus colaboradores sin que precise el tipo de colaboración, si bien pudiera deducirse que se trataría de una prestación de servicios técnicos por referirse a datos curriculares del colaborador. Teniendo esta circunstancia en cuenta, la comunicación podría considerarse amparada en el citado precepto, dado que el adecuado mantenimiento de la relación laboral o el arrendamiento de servicios sólo podrá llevarse a efecto cuando la propia entidad consultante pueda dar a conocer a terceros la experiencia y currículum profesional de sus trabajadores o colaboradores, a fin de lograr, en su caso, la contratación de los servicios prestados por la empresa por las Administraciones Públicas.



En todo caso, no obstante, es preciso tener en cuenta que dicha habilitación no es absoluta, limitando la cesión la propia norma habilitante a los datos que la justifiquen.

De este modo, la transmisión debería limitarse, como se ha indicado, a los datos que acrediten la solvencia profesional de la entidad consultante, sin que sea precisa la comunicación de ningún dato que exceda de esa finalidad. Así, por ejemplo, no sería preciso facilitar datos que suelen obrar en el currículum del trabajador y que no se refieren estrictamente a su titulación y experiencia, tales como datos de aficiones u otros cuyo conocimiento pudiera resultar justificado en un proceso de selección, pero que no revisten interés alguno para las posibles entidades contratantes.

II

Al propio tiempo, la licitud de la cesión no exonera a la entidad consultante de dar cumplimiento al deber de información, previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 y que expresamente hace referencia a los destinatarios de la información.

De este modo, la consultante debería haber informado previamente al afectado, bien mediante la indicación expresa de esta circunstancia en el correspondiente contrato, bien mediante una comunicación fehaciente posterior, del hecho de que sus datos curriculares podrán ser comunicados a las entidades públicas a las que se oferten los servicios de la consultante.

Al propio tiempo, la conclusión alcanzada únicamente operaría en los supuestos en los que exista un vínculo real con la consultante. En aquellos casos en los que se pretenda, por ejemplo, la comunicación a las Administraciones Públicas de los datos de personas que pudieran ser contratadas en caso de que el contrato administrativo de obra le fuera adjudicado y se llevase efectivamente a cabo, es decir, datos de personas que no prestan sus servicios a la consultante pero podrían prestarlos para un determinado contrato que pudiera celebrarse en el futuro, será necesario el consentimiento de los afectados.

Así lo pone de manifiesto la resolución de esta Agencia de 19 de octubre de 2007 que considera infringida la Ley Orgánica 15/1999 en el supuesto en que una empresa facilitó los datos de una determinada persona en la presentación de una oferta en un procedimiento de contratación pública, cuando dicha persona no había prestado su consentimiento para ello, habiendo únicamente existido entre la cedente y el afectado una reunión con vistas a su posible contratación futura en caso de resultar la cedente adjudicataria del concurso.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,